



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)**

<b>REFERENCIA:</b>	<b>SENTENCIA</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>JEFFER CAMILO QUINTERO CANO</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>PROTECCIÓN</b>
<b>LITISCONSORTE:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>050001 – 31 – 05 – <u>006 - 2016- 00962</u></b>
<b>ACTA N°:</b>	<b>41</b>

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **JEFFER CAMILO QUINTERO CANO** en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA – PROTECCIÓN SA** y la llamada a integrar la Litis la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** para pronunciarse en virtud del recurso de apelación presentado por el DEMANDANTE frente a la sentencia con la cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 41** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### **1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

Se pretende con este proceso lo siguiente: **i)** Declarar que **JEFFER CAMILO QUINTERO CANO** le asiste derecho a la **PENSIÓN DE INVALIDEZ** tomando como fecha el 30 de febrero de 2016, fecha en que dejó de cotizar por tener una enfermedad DEGENERATIVA y condenar a PROTECCIÓN a pagar la pensión de invalidez con las mesadas adicionales y los reajustes de ley. **ii)** Condenar a intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, indexación de las condenas

---

<sup>1</sup> Archivo PDF titulado "01Expediente006201600962Folios01Al211, págs. 1 a 9"

Para sustentar las pretensiones se afirmó, en síntesis: **i)** Se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual administrado por PROTECCIÓN. Presenta una PCL del **52,16%** con fecha de estructuración del 29 de abril de 2013. Fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 5 de septiembre de 2014, sufragando cotizaciones hasta febrero de 2016, fecha a partir de la cual no pudo seguir ofreciendo su fuerza física al mercado laboral por la enfermedad que padece. **ii)** Presenta enfermedad degenerativa “NEURALGIA DEL TRIGEMINO, ESQUIZOFRENIA PARANOIDE y DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL”, por ello debe tomarse la última cotización, febrero de 2016 a efectos de la concesión de la prestación y cuenta con más de 50 semanas en los tres años anteriores a dicha fecha.

## 2. LAS CONTESTACIONES

### 2.1. PROTECCIÓN<sup>2</sup>

La administradora del Régimen de Ahorro Individual se opuso a las pretensiones interpuestas, indicando que las mismas carecen de fundamento legal, contractual y reglamentario: **i)** El demandante no cotizó las 50 semanas en los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral definida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. **ii)** No puede pretenderse la variación de la fecha de estructuración definida por dos entes competentes para hacerlo, la Comisión Médico Laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida SA y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, máxime porque el demandante no agotó todas las instancias “saltándose así a la Junta Nacional de Calificación”. **iii)** No es posible acceder a tener como fecha de estructuración el **30 de febrero de 2016** porque el demandante continuó laborando por lo que no se cumple con lo señalado por la Corte suprema de Justicia “..Una persona es inválida cuando no puede seguir ofreciendo su fuerza laboral, por la disminución sustancial de sus capacidades físicas e intelectuales para desarrollar una actividad laboralmente remunerada”. **iv)** No hay lugar al pago de mesadas adicionales como se pretende, por cuanto el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que solo tendrán derecho a las mesadas adicionales aquellas personas que causen el derecho a la pensión antes del 31 de julio de 2011 y la fecha de estructuración es del 29 de julio de 2013. **v)** Tampoco son procedentes los intereses moratorios pretendidos, ni la indexación.

Formuló como excepciones perentorias: FALTA DE INTEGRACIÓN DEL CONTRADICATORIO excepciones denominadas: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN

<sup>2</sup> Archivo PDF “01ExpDigital201900261Folios358, págs. 62 a 83”

ALGUNA FRENTE A PROTECCIÓN SA, PLENA VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS – INEXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD, LA CALIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ ES UNA COMPETENCIA OTORGADA POR LA LEY EXCLUSIVAMENTE PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN, DEBE HABER UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO EXIGIDO LEGALMENTE PARA CALIFICAR LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, UNIDAD DE CRITERIOS EN LOS DICTÁMENES RENDIDOS, NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA CONTROVERTIR EL DICTÁMEN, VARIACIÓN DE LA CONDICIÓN CLÍNICA DE LA (sic) PACIENTE CON POSTERIORIDAD AL DICTAMEN DE LA JUNTA REGIONAL NO PUEDE AFECTAR A PROTECCIÓN SA, IMPROCEDENCIA DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, EXEQUIBILIDAD DEL REQUISITO DE 50 SEMANAS, INEXISTENCIA DE MORA DURANTE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE LA ÚNICA PRESTACIÓN QUE ESTABA A CARGO DE MI REPRESENTADA – LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, FALTA DE CAUSA PARA DEMANDADAR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, PAGO Y COMPENSACIÓN y La EXCEPCIÓN GENÉRICA<sup>3</sup>.

## 2.2. COLPENSIONES<sup>4</sup>

La administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida se opuso a las pretensiones interpuestas en la demanda planteando, manifestando: **i)** El demandante no se encuentra afiliado a COLPENSIONES, actualmente se encuentra válidamente afiliado al RAIS. **ii)** No reúne los requisitos necesarios para que se le reconozca la pensión de invalidez, cuenta con cero (0) semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. No reúne requisitos para que se aplique el precedente jurisprudencial en casos de enfermedades degenerativas y catastróficas, que exige que las 50 semanas se contabilicen en los 3 años anteriores a la fecha en que se realizó el Dictamen de la Pérdida de Capacidad Laboral y no desde la última cotización como pretende el actor. Propuso excepciones denominadas: PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR PENSIÓN DE INVALIDEZ, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, COMPENSACIÓN INDEXADA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y la EXCEPCIÓN INNOMINADA.

<sup>3</sup> PROTECCIÓN propuso como **excepción previa** la denominada NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y el Juzgado de Conocimiento profirió auto el **30 de octubre de 2017** en el que **ordenó la vinculación por pasiva con COLPENSIONES**, por ello en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, de Decisión de Excepciones Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio y Decreto de Pruebas llevada a efecto el 1 de agosto de 2018 se declaró que ya no había excepción que resolver por haberse vinculado a aquella entidad.

<sup>4</sup> Archivo PDF titulado "01ExpDigital201900261Folios358, **págs. 110 a 114**"

3. SENTENCIA

Mediante sentencia del **14 de noviembre de 2019** la **JUEZ SEXTA LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** tomó las siguientes decisiones<sup>5</sup>: **ABSOLVIÓ** a las AFP PROTECCIÓN SA y COLPENSIONES de las pretensiones formuladas en su contra por JEFFER CAMILO QUINTEO CANO. Declaró que las excepciones propuestas quedaban resueltas implícitamente. No impuso costas.

4. RECURSO DE APELACIÓN DEL DEMANDANTE

El apelante solicita se **REVOQUE** la sentencia para CONDENAR a PROTECCIÓN o a COLPENSIONES al reconocimiento de invalidez aplicando el precedente constitucional y de la Sala de Casación Laboral insistiendo en lo siguiente: **i)** Se ha dejado claro en la sentencia que las enfermedades que padece el demandante son crónicas, pero lo que se discute es si conservó una capacidad laboral residual. **ii)** Si bien con las pruebas decretadas de oficio se constató la contratación con una entidad afiliadora de la Seguridad Social, esta vinculación no está prohibida, invoca para ello el Decreto 692 de 1994 artículo 10. Si bien el demandante realizó cotizaciones a través de dicha agremiación, también podía conservar una capacidad laboral residual y realizar trabajos como trabajador independiente. Enfatiza en que esta contratación no desvirtúa el que hubiese realizado cotizaciones en virtud de una capacidad laboral residual. **iii)** El interrogatorio de parte debe analizarse con detalle, no de manera apresurada, porque si bien manifestó que no era capaz de trabajar, también hay certificación de un empleado. Así, argumenta que analizando en conjunto la prueba, la esquizofrenia que padece, puede concluirse que sí conservaba una capacidad residual, aunque no llenó las expectativas del empleador. **iv)** Argumenta que debe tenerse en cuenta que se trata de una persona joven, para la fecha de estructuración tenía menos de 26 años, invocando el párrafo de la ley 860 de 2003 y la sentencia C 020 de 2015.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

5.1. TRASLADO Y ALEGACIONES

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>6</sup>, intervino el apoderado de **COLPENSIONES**<sup>7</sup> enfatizando en la falta de legitimación en

<sup>5</sup> Carpeta titulada "01PrimeraInstancia", Archivo PDF titulado "01ExpDigital201900261Folios358, págs. 213 a 215" y "03Audiencia006201600962Folios205"

<sup>6</sup> Carpeta nombrada "02SegundaInstancia", Archivo PDF Titulado "06AutoAdmiteCorreTraslado"

la causa de COLPENSIONES (Invoca el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, el artículo 3 del Decreto 2011 de 2012, la sentencia T 416 -1997). Aduce que la pretensión está encaminada al reconocimiento y pago de la pensión de Invalidez por parte de Protección S.A., y resalta que el accionante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual (SANTANDER AFP) desde el 01 de mayo de 2008; según Dictamen de pérdida de Capacidad Laboral emitido por la Junta Regional de Calificación la fecha de estructuración es del 29 de abril de 2013, data en la cual se encontraba en el RAIS (artículo 14 del Decreto 692 de 1994).

Por su parte la apoderada de **PROTECCIÓN** solicita se **confirme** la decisión adoptada en primera instancia, planteando lo siguiente<sup>8</sup>: **i) En primer lugar**, afirma que debe realizarse un pronunciamiento respecto a la validez de la afiliación del demandante al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones señalando: **a)** Según prueba anexa a la demanda y a la contestación de Colpensiones se evidencia que el señor Jeffer presentó afiliación a esa entidad desde noviembre de 2008 donde actualmente presenta vinculación activa según certificado del 19 de mayo de 2022 que se anexa con la impugnación. **b)** De acuerdo con el historial de vinculaciones el 29 de mayo de 2012 diligenció formulario de traslado hacia el RAI administrado por Colfondos S.A., cuando solo habían transcurrido 3 años y 6 meses aproximadamente, por lo que no se cumplió con el requisito establecido por el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Y en el 2013 se trasladó a Protección. Invoca así el Decreto 3995 de 2008 en su artículo 2 para solicitar que se establezca que se encuentra válidamente afiliado a Colpensiones, entidad que está llamada a responder por el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en caso de revocarse la sentencia de Primera Instancia. **ii) Ya en relación con el derecho pensional**, argumenta: **a)** La Comisión Medico Laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia definieron como fecha de estructuración el 29 de abril del 2013 y el señor Jeffer Camilo solo cotizó 0.05 semanas en los tres últimos años inmediatamente anteriores y reitera que no es lógico que se solicite el cambio de fecha de estructuración porque el demandante estuvo conforme y no interpuso recurso de apelación contra el dictamen de la Junta Regional (artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993), ni se allega ningún soporte o medio probatorio técnico que demuestre que existe un error en el dictamen. **b)** Aduce que tampoco se acredita que a partir del 30

---

7	Carpeta	titulada	"02SegundaInstancia"	archivo	PDF	Titulado
	"07CorreoConMemorialAlegatosColpensiones"					
8	Carpeta	titulada	"02SegundaInstancia"	archivo	PDF	Titulado
	"08CorreoConMemorialAlegatosProteccion"					

de febrero de 2016 haya dejado de laborar debido a su enfermedad ni que hubiese mantenido una capacidad laboral residual. Que de acuerdo con las pruebas que hay en el expediente es evidente que con posterioridad a la fecha de estructuración no ha tenido mejoría, no ha podido trabajar efectivamente de manera que no mantuvo una capacidad laboral residual para aplicarle el precedente invocado por el apoderado del demandante. **c)** Si se considera que el demandante si mantuvo una capacidad laboral residual no es posible que en este caso se cambie la fecha de estructuración de la parte actora de conformidad con el precedente (T-111 de 2016, la T-070 de 2014 y las 35450 de 2012, 31062 de 2009, 27528 de 2007) resaltando que la parte actora no cumplió con la carga probatoria, pues si bien la condición de salud puede desmejorar con el paso del tiempo ello no le ha impedido continuar laborando y efectuar cotizaciones después de la fecha solicitada en la demanda: 30 de febrero de 2016. **iii)** En el evento remoto en que se decida revocar la sentencia se absuelva de pagar intereses moratorios (Radicado 787 de 2013 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).

## 5.2. DECRETO DE PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del pasado 25 de mayo<sup>9</sup>, se pusieron en traslado de las partes dos documentos allegados por PROTECCION con los alegatos<sup>10</sup>: **i)** Certificado del **19 de mayo de 2022 expedido por COLPENSIONES** en el que se afirma que, verificada la base de datos de afiliados, el señor JEFFER CAMILO QUINTERO CANO se encuentra afiliado desde el 24 de noviembre de 2008 al régimen de prima media administrado por COLPENSIONES. **ii)** Historia Laboral de JEFFER CAMILO QUINTERO CANO en PROTECCIÓN actualizada al 19 de mayo de 2022.

Solo intervino el apoderado del **DEMANDANTE**, para señalar: **i)** Que el presente caso debe ser resuelto con arreglo a las sentencias SL3275/2019, SL5603/2019, SL5601/2019, SL3992/2019, SL4567/2019, SL770/2020, SU588/2016 SOBRE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y CRONICAS: **a)** El demandante presenta "NEURALGIA DEL TRIGEMINO, ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL", patologías que son compatibles con la condición de ser enfermedades crónicas y degenerativas. **b)** Insiste en "aplicar la excepción al conteo de semanas, no desde la fecha de ESTRUCTURACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ, sino desde la fecha de la **ÚLTIMA COTIZACIÓN** que para la fecha de la presentación de la demanda lo era desde el mes de febrero de 2016, pudiéndose además, la fecha de la solicitud de la

<sup>9</sup> CARPETA 02 SEGUNDA INSTANCIA – **Archivo 09**

<sup>10</sup> CARPETA 02 SEGUNDA INSTANCIA – **Archivo 08 – páginas 9 a 13**



prestación, tomándose como tal la fecha de la presentación de la demanda en apoyo judicial que lo es en fecha del mes de AGOSTO DE 2016, o incluso la fecha de la contestación de la demanda por parte de PROTECCIÓN que lo fuera en fecha del mes de MARZO DE 2017". **ii)** Sobre la validez de la afiliación expresa: **a)** Hace referencia a la contestación al hecho 1 de la demanda por PROTECCIÓN para indicar que se trata de confesión a través de apoderado, por lo que resulta extraño que a estas alturas del proceso recabe sobre tal aspecto. **b)** Agrega que la misma entidad a través de CERTIFICADO del SIAFP lo corroboró (Fl. 86 Exp. Digital) y que el trámite adelantado con miras a que se calificara al actor fue iniciado por dicha entidad a través de SURA – PROTECCION (Fl. 87 Exp. Dig.) **c)** Si lo que quería PROTECCION era formular reparos de cara a la validez de la afiliación del actor debió hacerlo dentro de los términos legales (artículo 11 Decreto 692 de 1994), señalando que este caso no es ajeno a la figura jurídica de aceptación tácita de la afiliación (SL010/2019, 40531/2011, 14263/15, 413/18, 196/19)

### 5.3. PROBLEMAS JURÍDICOS EN ESTA INSTANCIA

Pues bien, en este proceso en el que se ha proferido una sentencia **ABSOLUTORIA**, si bien la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación presentado por la parte **DEMANDANTE**, sin embargo, a partir de los planteamientos efectuados por las partes en relación con la validez de la afiliación del demandante en el sistema general de pensiones, el orden lógico del análisis será el siguiente:

- En primer lugar, se analizará si en el caso concreto se acredita la afiliación tácita del demandante en el RAIS concretamente en PROTECCION o si el demandante se encuentra afiliado al RPM administrado por COLPENSIONES.
- Dilucidado lo anterior, y ya en relación con el derecho pensional deprecado, esta corporación verificará: **i)** Si en este caso, en el que el demandante padece enfermedades crónicas y degenerativas, se acredita que hubiese tenido una capacidad laboral residual con posterioridad a la fecha de estructuración definida en los dictámenes (29 de abril de 2013), que permita ordenar el reconocimiento a la pensión de la vejez conforme el precedente reiterado de las Altas Cortes sobre la materia. **ii)** En caso afirmativo, si resulta procedente condenar a intereses moratorios o indexación

## 6. LA VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN DEL DEMANDANTE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

PROTECCION en la contestación de la demanda afirmó que JEFFER CAMILO QUINTERO presenta cuenta activa en PROTECCIÓN y realizó solicitud de traslado a PROTECCIÓN el 28 de enero de 2013 como consecuencia de un traslado de AFP proveniente de

COLFONDOS S.A., pero que de acuerdo con los anexos de la demanda presenta afiliación activa en COLPENSIONES por lo que “se encuentra un aparente conflicto de *multiafiliación*”. Adujo que “ya se escaló el caso a COLPENSIONES y ASOFONDOS” para definir cuál es la afiliación válida y agregó que, en el remoto evento de que las pretensiones salieran adelante “y se defina la *multiafiliación a favor de COLPENSIONES*” esta sería la encargada de asumir la prestación. Esta misma tesis la plantea en los alegatos en esta instancia a partir del certificado de COLPENSIONES del 19 de mayo de 2022<sup>11</sup>, insistiendo en que de acuerdo con el historial de vinculaciones JEFFER CAMILO QUINTERO el 29 de mayo de 2012 diligenció formulario de traslado hacia el RAI administrado por Colfondos S.A. cuando solo habían transcurrido 3 años y 6 meses de su afiliación al Régimen de Prima Media.

Pues bien, de acuerdo con la prueba aportada en el proceso, no es objeto de discusión lo siguiente: **i)** Según reporte de semanas cotizadas de COLPENSIONES el 28 de noviembre de 2017, JEFFER CAMILO QUINTERO se afilió por primera vez a dicha entidad el **24 de noviembre de 2008** y cotizó de manera interrumpida hasta el mes de agosto de 2009 42.43 semanas. En el documento se expresa sobre el Estado de Afiliación: **Inactivo**<sup>12</sup>. **ii)** El reporte SIAFP del 8 de marzo de 2018 muestra una **vinculación por responsabilidad del empleador** a COLFONDOS, con fecha de solicitud del 29 de mayo e inicio de efectividad del 30 de mayo de 2012 y un traslado de AFP a PROTECCIÓN<sup>13</sup>. **iii)** Ahora bien, se verifica por la Sala que el demandante suscribió SOLICITUD DE VINCULACION a PROTECCIÓN el **28 de enero de 2013**, en la que se marcó la casilla **vinculación inicial y aparece en blanco el espacio referido a AFP anterior**<sup>14</sup>. En efecto, ante oficio librado en primera instancia COLFONDOS certificó que el demandante presentó afiliación a dicha entidad en cabeza del empleador, “no obstante, posteriormente se evidenció proceso de *Multiafiliación*, motivo por el cual confirmamos que las dos cotizaciones realizadas a Colfondos fueron pagadas a la AFP PROTECCIÓN”. Allegó reporte con el que se acredita que los aportes realizados en COLFONDOS fueron solo dos: Por el mes de mayo de 2012 (1) un día y por el mes de enero de 2013, seis (6) días. Y también anexa el reporte de pago que en su momento realizó COLFONDOS a PROTECCIÓN en razón de tal *multiafiliación*<sup>15</sup>. **iv)** Las historias laborales de PROTECCION acreditan cotizaciones a dicha entidad a través de

<sup>11</sup> CARPETA 02 SEGUNDA INSTANCIA /PDF 08- página 9

<sup>12</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – página 115

<sup>13</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – página 86

<sup>14</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – página 84- 85

<sup>15</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – 206- 207



diferentes de empleadores<sup>16</sup> y COLPENSIONES en sus intervenciones en el proceso ha argumentado la FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA señalando que el accionante se encuentra trasladado al RAI (SANTANDER AFP) desde el 1 de mayo de 2008<sup>17</sup>. En efecto, las historias laborales de PROTECCION acreditan cotizaciones a dicha entidad a través de diferentes de empleadores<sup>18</sup>. **vi)** Finalmente, se advierte que JEFFER CAMILO QUINTERO fue remitido por PROTECCION ante SURA con el fin de que le fuera calificada la pérdida de capacidad laboral <sup>19</sup> y que esta AFP denegó la pensión de invalidez solicitada, argumentando el incumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, sin que efectuara pronunciamiento alguno referido a cuestionar la validez de la afiliación a dicha entidad<sup>20</sup>.

Pues bien, valorando el acervo probatorio previamente reseñado, advierte esta corporación en primer lugar, que el fugaz paso del demandante por COLFONDOS en virtud de los aportes realizados por dos empleadores antes de afiliarse a PROTECCION (en mayo de 2012 por un (1) día y en enero de 2013 por seis (6) días) fue un asunto claramente resuelto por las entidades ante la evidente multifiliación, sin que tampoco se acredite que se hubiese puesto en conocimiento del joven QUINTERO CANO tales circunstancias.

Y si bien no transcurrieron 5 años entre la afiliación inicial al régimen de prima media (24 de noviembre de 2008) y la solicitud de vinculación en PROTECCIÓN (29 de enero de 2013) tal circunstancia, así como la irregularidad en el diligenciamiento de tal formulario a instancia de la administradora de pensiones, en manera alguna invalida su traslado a esta AFP: PROTECCIÓN jamás le informó sobre las posibles deficiencias de la afiliación o vinculación, por el contrario, a partir de ese momento comenzó a recibir aportes de parte de los diferentes empleadores, los que asentó en la historia laboral; gestionó ante la compañía aseguradora y la Junta Regional de Calificación de Invalidez la valoración de la pérdida de capacidad laboral hasta que finalmente denegó la prestación, **sin discutir a lo largo del trámite la validez de la afiliación.**

---

<sup>16</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – página 99, 200 a 203. CARPETA 02 SEGUNDA INSTANCIA /PDF 08- páginas 10 a 13

<sup>17</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – en la contestación y en las alegaciones en la segunda instancia, así como en la Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial - página 128 a 130

<sup>18</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – página 99, 200 a 203. CARPETA 02 SEGUNDA INSTANCIA /PDF 08- páginas 10 a 13

<sup>19</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – páginas 87- 89

<sup>20</sup> CARPETA 01 PRIMERA INSTANCIA /PDF 01 – Expediente0062016000962 – páginas 95 a 98

Sobre el particular se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiterando con razón que cuando a pesar de las posibles deficiencias en la afiliación al sistema pensional o traslado de régimen, el empleador realiza el pago de los aportes y la entidad pensional los recibe sin manifestación o reparo alguno, se configura una **“aceptación tácita de la afiliación”**<sup>21</sup>.

En efecto, a partir del principio de primacía de la realidad sobre las formas consagrado en nuestra Carta Política (**artículo 53**) y que se extiende también a estos casos, debe concluirse que las omisiones en el simple diligenciamiento del formulario se desvanecen ante las cotizaciones efectuadas que ofrecen razones de la voluntad del afiliado y de la administradora que las recibe, y denotan una situación fáctica real de inscripción a un determinado régimen de pensiones.

Lo anterior, sumado a lo que ya se ha resaltado en esta providencia, derivado de los múltiples actos de relacionamiento que se han presentado entre afiliado y entidad, sin que ésta en manera alguna hubiese discutido la validez de su afiliación y pretenda hacerlo en el marco de este proceso, vulnerando de este modo otros principios constitucionales como el de eficiencia e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social (**artículo 48**), así como el de buena fe y sus derivaciones en confianza legítima y respeto por el acto propio (**artículo 23**). Finalmente, destaca la Sala el modo de razonar de la Alta Corporación en la sentencia **SL 14236 – 2015**:

Adicionalmente, es de resaltar que la solución dada por el *ad quem* al caso particular del *sub lite*, justamente, responde al **mandato constitucional contenido en el artículo 48** que garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social y la reconoce como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. **Es evidente que sería letra muerta el principio de eficiencia si se permitiera que el fondo se exonerara del reconocimiento de la pensión de invalidez pese a que el beneficiario ha cotizado el tiempo requerido para tener el derecho y reúna los demás requisitos (como en el sub lite) solo porque faltó el diligenciamiento del formulario, y el fondo solo se lo vino a decir justo cuando reclama la prestación a que tiene derecho.** Tampoco, se le estaría garantizando el derecho constitucional a la seguridad social.  
(...)

En el presente caso, se reitera, el fondo omitió dar información al trabajador y al empleador, oportunamente, sobre la falta de afiliación, y no es para nada razonable que resulte favorecido de su propia omisión, máxime que el trabajador efectivamente realizó los aportes al sistema contribuyendo así a la sostenibilidad financiera del sistema.

**Ya esta Sala ha señalado cuál es el papel que cumplen las administradoras en el sistema general de pensiones; dada la naturaleza de servicio público de la seguridad social cuya administración tienen a su cargo, estas no pueden asumir una actitud pasiva y beneficiarse de ella, en detrimento de los derechos de los interesados a la seguridad social [...].**

(resalto intencional de la Sala)

<sup>21</sup> CSJ SL 40531, 19 jul. 2011 – SL17566-2014, SL14236-2015, SL 6035-2015, SL6066-2016, SL196-2019, SL 196-2019, SL2810-2019, SL 861 -2021, SL 4131- 2021, SL 4235-2021

## 7. PENSIÓN DE INVALIDEZ – ENFERMEDAD CRÓNICA, DEGENERATIVA Y/O CONGÉNITA

Para efectuar el análisis debe señalarse en primer lugar, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte o las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional.

Esta calificación no comporta prueba solemne, por lo que el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, así como aplicar criterios de igualdad material (**SL 2797 de 2020**), postulados que se activan cuando se está en presencia de patologías de carácter congénito o degenerativo, en tanto es posible que la fecha de estructuración que dictaminan las instituciones encargadas no refleje de forma cierta el momento en que el individuo se vio imposibilitado para el ejercicio de alguna actividad productiva.

En efecto, si bien la regla general es que para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, además de una pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 50%, debe acreditarse una densidad de semanas cotizadas dentro de un lapso o tiempo determinado que sean anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; también lo es que, **de manera excepcional, frente a este tipo de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas**, es posible contabilizar las semanas posteriores a la estructuración de dicho estado, siempre y cuando sean producto de la capacidad laboral que le permita al afiliado desempeñar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar (**SL2332-2021, SL5576-2021, SL5695-2021, SL002-2022, SL926-2022**).

Lo anterior, se sustenta en la obligación de proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad, resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a superar la situación de desigualdad y de desprotección a la que se ven sometidas, pues es a partir del paradigma establecido por los diversos instrumentos internacionales, en torno al deber de los Estados de brindar un trato igualitario y digno a las personas en condición de discapacidad, que el legislador ha ido a la par de dichas prerrogativas, con la expedición de las Leyes 1046 y 1306 de 2009, y 1618 de 2013, con el fin de

establecer un modelo de inclusión social para superar las barreras a las que dicha población está sometida. Es por todo lo anterior que en casos en los que las personas con discapacidad relacionada con afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, deben ser protegidas en aras de buscar que el sistema de seguridad social cubra la contingencia de la invalidez, una vez su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, derechos que, se itera, sí están reconocidos a los demás individuos.

La Corte Constitucional en sentencia **SU 588 de 2016**<sup>22</sup> refiriéndose a los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, señaló que, cuando se trata de este tipo de enfermedades, el análisis de la pensión de invalidez no debe seguir unas reglas rígidas respecto a la contabilización de las 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha de estructuración, en tanto tal actuar lleva a conclusiones desfavorables o desproporcionadas para los afiliados que soportan patologías de larga duración, que en ocasiones se presentan desde el nacimiento o su diagnóstico se da a temprana edad, lo que impide que se acumule la densidad de cotización necesaria, pese a que en su vida laboral reporten una cantidad significativa de cotizaciones.

En tales supuestos, ha adocinado que es necesario **contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez**, pues de lo contrario se impone a la persona una condición imposible de cumplir, cual es la de exigirle una densidad de cotización en fechas tempranas de su vida o incluso previas a su nacimiento, aunado a que se desconoce que, pese a la condición de discapacidad la persona puede ejercer una profesión u oficio de donde derive recursos económicos que garanticen su subsistencia total o parcial, los que a su vez sirven de sustrato para realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Así, la Alta Corporación creó unas sub reglas que COLPENSIONES o las AFP deben verificar cuando se presentan este tipo de casos, a saber: **i)** Que la solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa. **ii)** Que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas; y, **iii)** Que los aportes fueron realizados en ejercicio

---

<sup>22</sup> Criterio reiterado en posteriores decisiones de tutela, entre ellas las sentencias **T 470 de 2020**, **T 095 de 2022**, entre otras

de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema.

En síntesis, teniendo en cuenta la finalidad de la pensión de invalidez, cual es procurar un mínimo de ingresos a la persona que ha perdido su capacidad laboral, la jurisprudencia nacional coincide en que, en tratándose de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, el análisis del cumplimiento de la densidad de cotización ha de efectuarse de una forma particular a las condiciones del caso, a efectos de determinar de forma cierta el momento en que se perdió la capacidad para laborar y que las significativas cotizaciones no se efectuaron con el fin de defraudar el sistema pensional.

#### **7.1. CASO CONCRETO: JEFFER CAMILO QUINTERO PADECE DOS ENFERMEDADES CRÓNICAS O DEGENERATIVAS y ACREDITA UNA CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2017**

**La Juez** de instancia concluyó que pese a las patologías del demandante (NEURALGIA DEL TRIGEMINO - calificada como un trastorno de dolor crónico – y ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - enfermedad crónica y degenerativa), en este caso no se acredita el derecho pensional a su favor porque no se acreditó que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez mantuviera una capacidad laboral residual que le permitiera laborar y generar ingresos y con ellos aportar al Sistema General de Pensiones.

Y es contra esta decisión y análisis que **el recurrente** plantea, que en este caso sí se demostró la capacidad laboral residual, insistiendo en que a partir de una valoración integral del acervo probatorio se puede concluir que JEFFER CAMILO sí tuvo una capacidad laboral residual hasta **febrero de 2016**, última cotización realizada para el momento en que se presentó la demanda. Y ya en esta instancia, el apoderado argumenta a partir del precedente de las altas Cortes sobre la materia, que también se puede tener como fecha de estructuración del estado de invalidez: **i) La fecha de la solicitud de la prestación (fecha de la radicación de la demanda) – agosto de 2016 – o ii) la fecha de la contestación de la demanda: marzo de 2017.**

A continuación, se efectuará entonces el análisis a partir de los lineamientos del precedente previamente analizado:

**7.2. En primer lugar, no queda duda que la solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa.**

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la **sentencia SL 3275 -2019**, acogiendo el precedente constitucional antes referido, señala en relación con las enfermedades crónicas lo siguiente:

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), debido a sus características las enfermedades de tipo **«crónico»** son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual *«aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un **estado funcional**, mediante el consumo constante de fármacos (...); dichas enfermedades, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades mundiales»*.

De acuerdo con dicha organización, **las enfermedades crónicas** incluyen un grupo de padecimientos y condiciones que, a pesar de tener manifestaciones clínicas diversas, comparten algunas características básicas comunes, como son **su persistencia, el requerir manejo durante años o decenios y el hecho de que desafían seriamente la capacidad de los servicios de salud**<sup>23</sup>. Se caracterizan también por tener *«estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter degenerativo»* que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto afectado.

Desde la perspectiva de los determinantes sociales, la presencia de condiciones crónicas se concibe como un proceso social que asume características distintas en los grupos humanos según la forma en que se concretan los modos de vida, las condiciones de clase social, las condiciones de trabajo y la manera como se expresan a través de las construcciones culturales y las prácticas sociales. Por ello, **su evaluación no resulta sencilla, en la medida que amerita un tratamiento distinto por ser una patología de larga duración**.

En efecto, frente a este tipo de padecimientos, la Corte Constitucional mediante sentencia **SU - 588 de 2016** se pronunció, al referir que las llamadas enfermedades **«crónicas, degenerativas y/o congénitas»** son aquellas que, debido a sus características, **«se presentan desde el nacimiento o son de larga duración y progresivas»**. Por tanto, en tales eventos, el momento en el cual se perdió definitivamente la capacidad para laborar, suele coincidir con el día del nacimiento, uno cercano a este o la fecha del primer síntoma de la enfermedad o del diagnóstico de la misma y, por esa razón, *«estas personas normalmente no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un número importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada»*.

**Ello significa que los padecimientos crónicos de larga duración son permanentes en el tiempo y se agravan de manera paulatina, lo cual, eventualmente, permite al paciente continuar con su actividad de trabajo, pese a que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado desde antes**”. (Negrilla intencional)

<sup>23</sup> Documento técnico del proyecto de desarrollo de autonomía para la prevención y control de las condiciones crónicas en el distrito capital plan de intervenciones colectivas. SDS. 2009.



Pues bien, a partir de la información proveniente del dictamen del **4 de marzo de 2014** de SURA<sup>24</sup>, del emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA el **05 de septiembre de 2014**<sup>25</sup> y en la detallada sustentación que en él se presenta<sup>26</sup>, resulta acertada la conclusión a la que se llega en la providencia que se revisa, en el sentido de que el joven JEFFER CAMILO QUINTERO CANO padece dos enfermedades crónicas: **i)** neuralgia del trigémino que se manifiesta como un dolor intratable atípico severo , sobre el que se conceptuó por el Instituto Colombiano del Dolor el 22 de julio de 2014<sup>27</sup> que la recuperación completa es nula y el manejo es solo paliativo y **ii)** esquizofrenia paranoide .

Y se acredita la calidad de inválido con el dictamen emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en el que se indica en el numeral “**5.2 DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CALIFICACIÓN**”: NEURALGIA DEL TRIFEMINO, ESQUIZOFRENIA PARANOIDE y DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL. Y en el numeral “**7. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL**” se establece una pérdida de capacidad laboral del **52,16%**, con fecha de estructuración el **29 de abril de 2013** y origen **Común**, discriminando cada uno de los ítems así:

Descripción		Porcentaje
I	DEFICIENCIA	28,91%
II	DISCAPACIDAD	5,00%
III	MINUSVALÍA	18,25%
Total		<b>52,16%</b>

Respecto a la fecha de estructuración asignada, se observa según el detalle que se discrimina en la sustentación del dictamen que el **29 de abril de 2013** neurocirugía intervino a JEFFER CAMILO, “realizándole descompresión neurovascular del n. trigémino derecho vía craneotomía suboccipital retromastoidea, no teniendo mejoría de la neuralgia del trigémino”.

**7.3. Con posterioridad al 29 de abril de 2013 JEFFER CAMILO QUINTERO CANO efectuó cotizaciones fruto de su capacidad laboral residual.**

De acuerdo con el análisis efectuado en esta providencia, habiéndose dilucidado el carácter crónico de las enfermedades que padece el joven QUINTERO CANO, deben ahora verificarse los siguientes aspectos: **i)** Que con posterioridad a la fecha de

<sup>24</sup>Carpeta“01PrimerInstancia”, Archivos PDF titulados “01Expediente006201600962Folios01Al211, **págs. 87 a 89**” y “04DictamenSura”

<sup>25</sup>Carpeta“01PrimerInstancia”, Archivos PDF titulados “01Expediente006201600962Folios01Al211, **págs. 13 a 16**” y “05DictamenJrciNotificaSustentacion”

<sup>26</sup>Carpeta“01PrimerInstancia”, Archivos PDF titulados “01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 17**

<sup>27</sup> Carpeta “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **págs. 35 a 36**”

estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, cuenta con un número importante de semanas cotizadas; y, **iii)** Que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema.

En efecto, desde la sentencia **SU - 588 de 2016** y en la jurisprudencia pacífica de la Sala de Casación Laboral se ha adocinado<sup>28</sup> que los padecimientos crónicos de larga duración que se agravan de manera paulatina, eventualmente, permiten al paciente continuar con su actividad de trabajo, pese a que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado desde antes. Así, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la respectiva obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, cotizaciones que resultan plenamente válidas y con las cuales puede alcanzar el reconocimiento de una pensión, pues de lo contrario, se desconocerían los aportes realizados *"en ejercicio de una efectiva y probada, explotación de una capacidad laboral residual"*

En el precedente se ha indicado que, en aras de evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantizar su sostenibilidad fiscal, es necesario, en cada caso, ponderar el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, para corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes de una actividad laboral efectivamente ejercida. Y debe señalarse que conforme el precedente referido, las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración definida en los dictámenes no necesariamente tienen que provenir de un vínculo laboral dependiente, es decir, realizadas a través de un empleador. Porque también puede afirmarse una capacidad laboral residual de quien cotiza como independiente, incluso a través del régimen subsidiado.

Así, en cada caso concreto se analiza el conjunto del acervo probatorio, incluyendo claro está la historia laboral y la información que de ella se deriva, porque finalmente lo relevante está en verificar que la persona efectivamente ejerció una actividad productiva (dependiente o independiente), que le permitió generar ingresos y

---

<sup>28</sup> **SL 3992- 2019, SL 4625 – 2019, SL 5603 de 2019, SL505- 2020, SL770 DE 2020, SL1002 -2020, SL4534-2020, SL4935-2020, SL4965-2020, SL198-2021, SL335-2021, SL2332-2021, SL5576-2021, SL5695-2021, SL002-2022, SL926-2022.**

efectuar el pago del aporte correspondiente al sistema general de pensiones, a pesar de sus enfermedades.

En estos términos se ha expresado en la sentencia **SL 3275 de 2019**:

[...] en lo que corresponde a la efectiva y probada capacidad residual, esta Sala explicó que el padecimiento referido ocasiona que la fuerza laboral se mengüe con el tiempo y, por lo tanto, **le permite a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le impida, de manera cierta, llevar a cabo una labor.**

De tal modo, **que esa capacidad consiste en la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.** Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones realizadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual, y no que se hicieron con el único propósito de defraudar al sistema de seguridad social. (negrilla intencional)

Pues bien, analizando el haz probatorio a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo**, se advierte que el demandante probó que, si bien en el dictamen se definió como fecha de estructuración el **29 de abril de 2013**<sup>29</sup> data para la cual tenía **21 años** de vida, tuvo una **CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL** que le permitió realizar cotizaciones hasta el **18 de febrero de 2017**<sup>30</sup>, veamos por qué:

- El demandante nació el **1 de octubre de 1991**<sup>31</sup> y de acuerdo con la historia laboral inició su actividad laboral siendo aún menor de edad a sus **17 años** efectuando cotizaciones a través de su empleador DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA LTDA entre **noviembre de 2008** y el **20 de septiembre de 2009** en el régimen de prima media<sup>32</sup>.
- Analizando de manera conjunta la evolución de la historia clínica de este joven con su historial de aportes en el sistema general de pensiones, se advierte que desde el **16 de agosto de 2012** a sus **20 años** de edad comienzan las consultas con el neurólogo por cefalea en el hemicráneo derecho, diagnosticándose desde el **22 de agosto** siguiente la **enfermedad crónica** que padece: neuralgia del trigémino. Tuvo múltiples hospitalizaciones a partir del mes de diciembre de ese año y durante el primer trimestre del 2013 hasta que el **29 de abril** “neurocirugía lo intervino, realizándole descompresión neurovascular del n. trigémino derecho vía craneotomía suboccipital retromastoidea, **no teniendo mejoría de la neuralgia del trigémino**”. El **31 de julio de 2013** neurocirugía conceptúa que tiene dolor facial atípico severo, con muy mala respuesta a los tratamientos, de mal pronóstico de recuperación, con problemas psiquiátricos y dolor intratable. Y el **10 de octubre de**

<sup>29</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivos PDF titulados “04DictamenSura” y “05DictamenJrciNotificaSustentacion”

<sup>30</sup> De acuerdo con la historia laboral del **19 de mayo de 2022** decretada en esta instancia

<sup>31</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 39**”

<sup>32</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 20 y 21 a 31 y 115 a118**”

**2013** psiquiatría señala que presenta síntomas psicóticos intermitentes de un año de evolución **conceptuando que presenta esquizofrenia paranoide** continuando con la medicación.

No obstante, en ese **año 2013** y a pesar de sus dos padecimientos crónicos, JEFFER CAMILO realiza aportes con **E & A APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL S.A.S.** por 6 días en el mes de enero y cuatro meses después de la intervención que le fuera realizada por neurocirugía el 29 de abril, aporta con este empleador cuatro (4) meses, de **septiembre a diciembre de 2013**.

- La historia clínica muestra consultas en el **año 2014** y concepto del Instituto Colombiano del Dolor del **22 de julio** en el que se indica que es un “PACIENTE CON DOLOR FACIAL ATÍPICO, DE MUY DIFÍCIL CONTROL, LAS POSIBILIDADES DE MEJORÍA SON MUY POBRES Y LA RECUPERACIÓN COMPLETA NULA – EL MANEJO ES SOLO PALIATIVO”. No obstante, en ese año retoma su actividad con **E & A APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL S.A.S.** en los meses de **septiembre y octubre**.

Se observa entonces que para el momento en el que se efectúa la valoración por la Junta Regional de Calificación de Invalidez - **05 de septiembre de 2014**<sup>33</sup> - el demandante estaba laborando al servicio de ese empleado y efectuando aportes. En efecto, en el **numeral 4** del dictamen se consigna en los antecedentes laborales “**EIA Soluciones Logísticas**” con el cargo de “**mensajero**”. Así, no comparte la Sala la valoración que se efectúa en la providencia que se revisa sobre las afirmaciones efectuadas por el demandante en la diligencia de interrogatorio de parte<sup>34</sup>, pues si bien inicialmente expresó que desde el año 2012 no volvió a laborar, luego precisó que esto fue desde la cirugía – que ocurrió el 29 de abril de 2013 –; pero en su narrativa asegura haber **trabajado** para **E&A APOYO LOGÍSTICO** como **mensajero**, actividad que de acuerdo con la historia laboral realizó de manera interrumpida en los **año 2013** de septiembre a diciembre; **2014** en **septiembre y octubre**; **2015** de agosto a diciembre y en **2016** en **enero y febrero**. Desde esa perspectiva, se advierte la confusión de JEFFER CAMILO en su declaración, que se justifica en sus padecimientos crónicos y que finalmente se dilucida con el resto del acervo probatorio, de manera que no se encuentra por esta corporación confesión alguna en su contra en los términos previstos en el **artículo 191** del Código General del Proceso.

<sup>33</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **págs. 12**”  
<sup>34</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo MP4 llamado “02Audiencia006201600962Folios122”

El acervo probatorio nos muestra que, si bien los calificadores definieron como fecha de estructuración de la invalidez de Jeffer Camilo aquella en la que se realizó la descompresión neurovascular del nervio trigémino derecho, a pesar de su dolor facial atípico y de la esquizofrenia que padece pudo continuar desempeñando su actividad laboral para **E&A APOYO LOGÍSTICO** como mensajero, aunque lo hiciera de manera discontinua, circunstancia que encuentra clara explicación justamente en razón de la cronicidad de sus padecimientos.

Ahora, en la demanda se afirma en el HECHO SEXTO que Jeffer Camilo sufragó cotizaciones hasta febrero de 2016 fecha a partir de la cual no pudo seguir ofreciendo su fuerza física al mercado laboral por la enfermedad que padecía, pero el historial de cotizaciones al plenario muestra aportes posteriores a dicha fecha, sobre los que se acredita lo siguiente:

En ese **año 2016**, aparecen cotizaciones efectuadas entre **abril y septiembre** con **INVERSIONES Y SERVICIOS LM S.A.S.**, acreditándose en el plenario que el demandante no tuvo un vínculo laboral con esta sociedad, con quien celebró “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (INDEPENDIENTES)”<sup>35</sup>, lapso en el que no se acredita por otro medio probatorio la capacidad laboral residual de Jeffer Camilo. Pero sí se prueba entre el **1 de octubre y el 3 de noviembre de 2016** con el empleador **VAS LOGÍSTICA**, quien certifica la existencia del vínculo en el cargo de conductor y como función, el desempeño de transporte de alimentos, devengando un salario mínimo<sup>36</sup>. Así, aunque se informa que el retiro de la empresa fue debido a abandono del cargo y no cumplimiento de expectativas durante el período de prueba, se trata de aportes realizados en ejercicio de su capacidad laboral residual y sin que se pueda afirmar en manera alguna que se efectuaron con la finalidad de defraudar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones con la única finalidad de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma, pues es evidente que se hicieron por una actividad laboral efectivamente ejercida.

Del mismo modo, se acredita tal circunstancia con los aportes realizados a través del empleador **GLOBALTRANNS CARGO SAS** en el año **2017, 27 días en el mes de enero y 18 días en febrero**. Finalmente se advierte por esta corporación que si bien en la historia aparecen aportes en los años **2018, 2019 y 2020** con **CONSTRUASOCIADOS V&A**

<sup>35</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **págs. 170 y 171 a 172**

<sup>36</sup> Carpeta titulada “01PrimerInstancia”, Archivo PDF titulado “01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 188**

**S.A.S.**, en ellos sólo se refleja cotización de **1 (un) día** por cada ciclo, lo que en manera alguna constituye prueba de una capacidad laboral residual durante ese lapso.

Pues bien, tal como se ha anunciado, la valoración del acervo probatorio en su conjunto nos muestra con claridad, que a pesar de las enfermedades crónicas que padece Jeffer Camilo, ha podido desempeñar actividades laborales para diferentes empleadores con posterioridad al **29 de abril de 2013** cuando se le realizó la intervención neurológica a sus **22 años**, pudiéndose como fecha de estructuración para la contabilización de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 el **18 de febrero de 2017** cuando cesó cotizaciones con el empleador **GLOBALTRANNS CARGO SAS**.

Y contabilizando las semanas cotizadas entre el **18 de febrero de 2014 y el 18 de febrero de 2017**, se encuentra lo siguiente: **i)** Las cotizaciones en ese lapso a través de **E&A APOYO LOGÍSTICO** como **mensajero**, con **INVERSIONES Y SERVICIOS LM S.A.S.**, con **VAS LOGÍSTICA** y con **GLOBALTRANNS CARGO SAS** suman un total de **494 días** que equivalen a **70.57 semanas**. **ii)** Las cotizaciones en ese lapso excluyendo las realizadas a través de **INVERSIONES Y SERVICIOS LM S.A.S.** suman un total de **348 días** que equivalen a **49.71 semanas**, con las que también se acreditan los requisitos exigidos en la norma, de acuerdo con el precedente pacífico sobre la materia en el que se ha avalado que cuando el decimal de semanas es superior al **0,5** se puede aproximar al número entero siguiente (**SL 982- 2019, SL 3722- 2019 y SL 4894- 2021**).

Se resalta por la Sala que a la luz de lo previsto en el **parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003**<sup>37</sup>, la sentencia **C 020 de 2015** y el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**SL 3085-2020, SL 2766-2021 y SL 1041-2022**), contabilizando las semanas cotizadas entre el **18 de febrero de 2016 y el 18 de febrero de 2017**, se encuentra lo siguiente: **i)** las cotizaciones en ese lapso a través de **E&A APOYO LOGÍSTICO** como **mensajero**, con **INVERSIONES Y SERVICIOS LM S.A.S.**, con **VAS LOGÍSTICA** y con **GLOBALTRANNS CARGO SAS** suman un total de **383 días** que equivalen a **54.71 semanas**. **ii)** Las cotizaciones en ese lapso excluyendo las realizadas a través de **INVERSIONES Y SERVICIOS LM S.A.S.** suman un total de **91 días** que equivalen a **13 semanas**.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a **REVOCAR** la decisión absolutoria en relación con la pretensión dirigida al reconocimiento de la

<sup>37</sup> **PARÁGRAFO 1º** Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.



**pensión de invalidez** al verificarse el cumplimiento de los requisitos por contar con una **PCL del 52,16%** y porque acredita **50 semanas cotizadas** en los **tres años anteriores** al **18 de febrero de 2017**, última cotización realizada con una real capacidad residual por su empleador **GLOBALTRANNS CARGO SAS**.

Se **CONDENARÁ** al retroactivo pensional desde el **18 de febrero de 2017** (artículo 40 Ley 100) hasta el **30 de junio de 2022** con base en el salario mínimo legal mensual vigente con 13 mesadas adicionales por haberse causado el derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011 en los términos del AL 01 de 2005, que genera la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$58.290.540)** de acuerdo con el siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL Rdo 006 2016 00962					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2017	4,09%	11,043		\$ 737.717	\$ 8.146.609
2018	3,18%	13		\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13		\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13		\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13		\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022		6		\$ 1.000.000	\$ 6.000.000
TOTAL					\$ 58.290.540

**PROTECCIÓN** continuará pagando a **JEFFER CAMILO QUINTERO CANO** la mesada pensional equivalente al salario mínimo de cada anualidad a partir del **1 de julio de 2022** que será reajustada en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993** y con **13 mesadas anuales**. Y descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, el que opera por mandato legal y **sin necesidad de declaración judicial**, como lo ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril** y la **SL1019-2020 del 12 de febrero**

Se propuso por **PROTECCIÓN** la excepción de **PRESCRIPCIÓN**, pero siendo claro que la primera mesada corresponde al mes de **febrero de 2017** y como la demanda con la que se pretende el reconocimiento y la consecuente condena al pago de la pensión de invalidez fue instaurada desde el **02 de agosto de 2016**<sup>38</sup>, en este caso **no ha prescrito mesada pensional alguna**.

<sup>38</sup> Carpeta titulada "01PrimerInstancia", Archivo PDF titulado "01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 10**"

## 8. INTERESES MORATORIOS o INDEXACIÓN

Se ha definido en la sentencia **C-601 de 2000** así como en las recientes providencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia - **SL1681-2020** y **SL3130-2020** – que la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de **resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales** y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones.

Por ello, esa corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como la sanción de intereses moratorios, encuentra un importante fundamento en el hecho de que la *«[...] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales»*, además de que *«Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial [...]»* (**CSJ SL1681-2020**).

En paralelo a lo anterior, ha sostenido que los intereses moratorios son **simplemente resarcitorios** y no sancionatorios<sup>39</sup>; de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, pues proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación<sup>40</sup>. Ello con la salvedad de algunos casos en los que las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas, **como lo es éste caso**.

En efecto, en este caso se advierte que la pensión se solicita el **1 de noviembre 2015**<sup>41</sup> momento para el que aún no se había consolidado el precedente respecto a la pensión de invalidez para personas con enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas definido a partir de la sentencia **SU-588 del 27 de octubre de 2016** así como en la Sala de Casación Laboral a partir de la **SL 3275 -2019**. Por lo anterior, no puede predicarse **tardanza injustificada** en el reconocimiento de la prestación, que por

<sup>39</sup> **CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016**, entre muchas otras

<sup>40</sup> Sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892,

<sup>41</sup> Carpeta titulada "01PrimerInstancia", Archivo PDF titulado "01Expediente006201600962Folios01Al211, **pág. 87**"

desarrollo jurisprudencial se reconoce en esta providencia, debiéndose ABSOLVER a PROTECCIÓN por estos intereses.

Pero encuentra esta corporación procedente imponer a PROTECCIÓN la indexación de la condena impuesta en la sentencia, por cuanto las mesadas reconocidas y no pagadas en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual *«dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales»*. Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

La indexación del retroactivo ordenado se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

**ÍNDICE FINAL** correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

**ÍNDICE INICIAL** correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

**VALOR A INDEXAR** que se refiere al **monto de cada mensualidad**

## 9. COSTAS

Al haberse revocado la decisión de primera instancia, se impone en ambas instancias costas a cargo de PROTECCIÓN. Se fijan como agencias en derecho en segunda la

suma de **3** salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte demandante.

## 11. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, decide **REVOCAR** la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, ordenando lo siguiente:

**PRIMERO: DECLARAR** como fecha de estructuración la última cotización realizada por **JEFFER CAMILO QUINTERO CANO** como resultado de su capacidad residual el **18 de febrero de 2017** y que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez por acreditar los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, a cargo de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.** entidad en la que se encuentra válidamente afiliado, conforme el análisis efectuado en esta providencia.

**SEGUNDO: CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.** a reconocer y pagar a **JEFFER CAMILO QUINTERO CANO** identificado con **c.c.1.128.478.648** como retroactivo de pensión de invalidez causado entre el **18 de febrero de 2017** y el **30 de junio de 2022** incluyendo las mesadas adicionales de diciembre hasta ahora causadas, que asciende a la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$58.290.540)**

Así, **PROTECCIÓN** continuará pagando una mesada pensional a partir del **1 de julio de 2022** equivalente a **UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000)** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**, con **13 mesadas al año**, pudiendo efectuar los descuentos para el Sistema en Salud.

**TERCERO: CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.** a la **INDEXACION** del retroactivo causado al momento del pago, de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

**ÍNDICE FINAL** correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

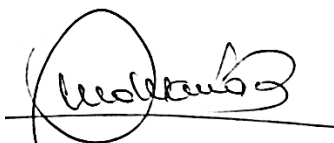
**ÍNDICE INICIAL** correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

**VALOR A INDEXAR** que se refiere al **monto de cada mensualidad**

**CUARTO: CONDENAR en COSTAS** en ambas instancias a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.** Se fijan como agencias en derecho en segunda la suma de **3** salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte demandante.

Lo anterior se notifica por **EDICTO**, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

**Los Magistrados,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**  
**SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA**



RADICADO: 050001 – 31 – 05 – 006 – 2016 - 00962

SENTENCIA del //17/06/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,  
**para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: [https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EInjVPyJlrRDI4lO9zbTS6ABZ1\\_NchdKjLvwnlB2EJH8YQ?e=ynWOU2](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EInjVPyJlrRDI4lO9zbTS6ABZ1_NchdKjLvwnlB2EJH8YQ?e=ynWOU2)